

Asociación de Historia Contemporánea
Actas del XIV Congreso

DEL SIGLO XIX AL XXI. TENDENCIAS Y DEBATES
(Alicante, 20-22 de septiembre de 2018)

Mónica Moreno Seco (coord.)
Rafael Fernández Sirvent y Rosa Ana Gutiérrez Lloret (eds.)



**BIBLIOTECA VIRTUAL
MIGUEL DE CERVANTES**
www.cervantesvirtual.com

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Alicante, 2019

Asociación de Historia Contemporánea. Congreso (14.º. 2018. Alicante)

Del siglo XIX al XXI. Tendencias y debates: XIV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Universidad de Alicante 20-22 de septiembre de 2018 / Mónica Moreno Seco (coord.) & Rafael Fernández Sirvent y Rosa Ana Gutiérrez Lloret (eds.)

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 2019. 2019 pp.

ISBN: 978-84-17422-62-2

Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2019.

Este libro está sujeto a una licencia de “Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)” de Creative Commons.



© 2019, Asociación de Historia Contemporánea. Congreso

Algunos derechos reservados

ISBN: 978-84-17422-62-2

Portada: *At School*, Jean-Marc Côté, h. 1900.

EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ESPECIAL NACIONAL DE PROPAGANDA ILEGAL (MAYO-1957-DICIEMBRE-1963): ¿UNA MEDIDA COYUNTURAL EXCEPCIONAL O UN ESLABON DE LAS INSTITUCIONES REPRESIVAS DE LA OPOSICION AL FRANQUISMO?

Juan José Del Águila Torres

Introducción y justificación del objeto de la inicial comunicación dado el carácter hasta ahora inédito y desconocido de esta institución represiva

El pasado mes de marzo aproveché la invitación de las entidades organizadoras de las *II Jornadas de Archivos, Derechos y Víctimas del Franquismo* para participar en una de sus sesiones *Historia y Archivos: experiencias en la investigación* y dar a conocer públicamente los últimos resultados obtenidos hasta ese momento en la investigación abierta sobre una desconocida-hasta esas fechas-institución represiva: el *Juzgado de Instrucción Especial Nacional de Propaganda Ilegal*⁶⁰⁰⁸.

Constituido de forma irregular por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en sesión de 25 de mayo de 1957, a petición escrita de la máxima representación del Ministerio Fiscal en dicha alta instancia y previa propuesta sugerencia de la Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación.

El tema fue objeto de atención de algunos medios informativos⁶⁰⁰⁹ y además ya he publicado una aproximación al tema, en la entrada del 9 de abril del blog *justiciaydictadura.com* cuyas visitas y lecturas resulta recomendable y necesaria para todos aquellos que puedan estar interesados en la creación y funcionamiento durante más de seis años de este Juzgado Especial Nacional⁶⁰¹⁰.

Los juzgados de instrucción especiales militares y civiles durante el primer y segundo franquismo

Estudiadas en profundidad hasta la fecha, la creación y funcionamiento de las Jurisdicciones Especiales durante la dictadura- la de Responsabilidades Políticas, la de Masonería y Comunismo

⁶⁰⁰⁸ Respecto a la singular forma de cómo empezó esta investigación a finales de noviembre del 2017 me remito a las noticias aparecidas en distintos medios de información.

⁶⁰⁰⁹ Entrevista en la RAI (Radio Andalucía Informativa) el jueves 15 de marzo del 2018 en el programa *La Memoria*: <http://www.canalsur.es/comunicacion/la-memoria--desvela-la-existencia-de-un-juzgado-franquista-especial-contr-la-propaganda-ilegal/1261185.h>. El 18 de ese mismo mes en el diario digital *Público*, artículo del periodista Rafael Guerrero: «Descubierto un nuevo instrumento represivo del franquismo: El Juzgado Nacional Especial de Propaganda Ilegal»: <http://www.publico.es/política/descubierto-nuevo-instrumento-represivo-franquismo-juzgado-nacional-especial-propaganda-ilegal.html>. El 3 de mayo era reproducido en el semanario digital *Crónica popular*: <https://cronicapopular.es/2018/05/el-juzgado-especial-nacional-de-propaganda-ilegal-1957-1963-un-antecedente-hasta-ahora-desconocido-de-la-jurisdicion-de-orden-publico/>.

⁶⁰¹⁰ Juan José DEL ÁGUILA TORRES: *El Juzgado Especial Nacional de Propaganda Ilegal: mayo de 1957-diciembre de 1963. Un antecedente hasta ahora desconocido de la jurisdicción de orden público*.

y la Jurisdicción de Orden Público⁶⁰¹¹, salvo la Jurisdicción de Guerra-militar o forense⁶⁰¹², no ocurre igual con los denominados Juzgados de Instrucción Especiales.

Por razones obvias y comprensibles de la limitación de la extensión de las comunicaciones nos vemos obligados a renunciar a la primera parte de esta exposición referida a los Juzgados Especiales de Instrucción que se pusieron en funcionamiento en los inicios y durante de la guerra civil y que lógicamente constituyen el antecedente histórico de la institución aquí estudiada Juzgado Especial Nacional de Propaganda ilegal, que esperamos incluir en lo que será el primer capítulo introductorio con los antecedentes de la nueva y próxima edición del libro sobre el TOP.

Juzgados Especiales Militares

El *Juzgado Especial Militar de Procedimientos de Espionaje*, que funcionó desde el 11 de junio de 1940 al 16 de noviembre de 1943, por Orden comunicada- que no se publicaba en el Boletín del Ejército ni tampoco en el Boletín Oficial del Estado-, siendo el titular del mismo el General de Infantería Jesualdo de la Iglesia Rosillo, que ya tenía entonces 71 años y con jurisdicción en todo el territorio nacional, dependiente de la Auditoria de Guerra de la Segunda Región Militar con sede en Sevilla. En el año 1941 pasó a denominarse Juzgado Especial de Espionaje y otras actividades Marxistas⁶⁰¹³.

Al ser nombrado el General Jesualdo de la Iglesia Rosillo Inspector general de todos los Juzgados de Espionaje de España le sustituyó en el 1943, el no menos célebre Coronel Enrique Eymar Fernández, quien asumió el cargo como juez militar instructor del Juzgado Especial de Espionaje y Comunismo, entre ambos instruyeron miles de causas con condenas a penas de muerte ejecutadas y de cientos de miles de años de prisión⁶⁰¹⁴.

Otros Juzgados Especiales Militares que se crearon el 5 de septiembre de 1945 por Orden del entonces Ministro del Ejército-General Dávila-para velar por el exacto cumplimiento de los

⁶⁰¹¹ Ernesto PEDRAZ PENALVA: *La Administración de Justicia durante la guerra civil en la España Nacional. (Jurisdicciones ordinaria y especiales)*, en Justicia en Guerra, Jornadas sobre la Administración de Justicia durante la guerra civil española: instituciones y fuentes documentales, organizada por el Archivo Histórico nacional-Sección Guerra Civil, Salamanca del 26 al 28 de noviembre de 1987, Madrid, Ministerio de Cultura, 1990. Mónica LANERO TABOAS: *Una milicia de la Justicia. La política judicial del franquismo (1936-1945)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996. Álvaro, ALVARO DUEÑAS: «Por ministerio de la Ley y la voluntad del Caudillo», *La Jurisdicción Especial de responsabilidades políticas 81939-1945*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2006. Guillermo PORTILLA: *La consagración del Derecho Penal de autor durante el franquismo. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y Comunismo*, Granada, Comares. 2009. Juan José DEL AGUILA: *El TOP. La represión de la Libertad (1963-1977), Apéndice 1. Las Jurisdicciones especiales hasta la creación del TOP*: del mismo autor, «La represión política a través de la jurisdicción de guerra y sucesivas jurisdicciones especiales del franquismo», en Ángel VIÑAS (coord.): *Sin respeto por la Historia, Una biografía de Franco manipuladora*, en *Hispania Nova*, número 1 extraordinario (2015), págs. 211-242.

⁶⁰¹² Quizás sea esta la Jurisdicción de Guerra la única que hasta la fecha no ha sido abordada con carácter global y sistemático, por las dificultades habidas hasta la fecha en el acceso a los archivos judiciales militares y su dispersión geográfica en las ocho Regiones Militares.

⁶⁰¹³ Juan José DEL AGUILA TORRES, «El General Jesualdo de la Iglesia Rosillo, primer juez militar instructor del juzgado especial de espionaje: un perfil biográfico para la represión». Comunicación al III Congreso Internacional de Historia de nuestro tiempo de la Universidad de la Rioja. Logroño 11 a 13.11. 2010.

⁶⁰¹⁴ Juan José DEL AGUILA TORRES: «Coronel Eymar, Un Juez militar especial para los prisioneros políticos españoles (1940-1964)», en *Actas Congreso Los campos de concentración y el mundo penitenciario en España durante la guerra civil y el franquismo*, Barcelona, Critica, 2003, pp. 503-521.

derechos individuales establecidos en el Fuero de los Españoles para los detenidos por la Policía Gubernativa o (sic) fuerzas con dichas facultades⁶⁰¹⁵.

Franco por Decreto de 24 de enero de 1958 nombró al Coronel de Infantería don Enrique Eymar Fernández, Juez militar especial, con jurisdicción en todo el territorio nacional para la tramitación de los procedimientos judiciales derivados de las actuaciones extremistas recientemente descubiertas, dependiente de la autoridad judicial de la Primera Región Militar, que podría disponer el término de esta jurisdicción excepcional⁶⁰¹⁶.

Los Juzgados Especiales Civiles durante el primer y segundo franquismo

La Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939⁶⁰¹⁷, en el Capítulo VI (De los Juzgados Especiales), Art.º 33 estableció: *A cada uno de los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas se le asignarán un Juzgado Civil Especial, constituido por un Juez de Primera Instancia o Magistrado de la carrera judicial y un Secretario del cuerpo de Secretarios Judiciales, los cuales serán nombrados por la Vice Presidencia del Gobierno a propuesta del Ministro de Justicia.*

Como bien decía Mónica Lanero con la finalización de la guerra civil se asistió a una proliferación de Tribunales y Juzgados Especiales que pretendían dar solución a situaciones anómalas derivadas de la contienda o se orientaban hacia la restauración social y económica, enumerando hasta siete diferenciados: *los Juzgados Gubernativos para la Recuperación de Bienes y Títulos sustraídos por los marxistas*, creados por Decreto de 7 de agosto de 1939; *los Juzgados de Desbloqueo*, creados por Ley de 7 de diciembre de 1940, para entender de la situación de las cantidades pendientes de pago al fin de la guerra por bienes o servicios realizados en zona republicana; el *Tribunal de Contratación en zona roja*, creado por Ley de 5 de noviembre de 1940 para revisar los contratos realizados durante la guerra en la zona republicana; el *Tribunal Arbitral de Seguros* creado por Ley de 23 de diciembre de 1939 para decidir sobre el cobro de seguros de vida de fallecidos a consecuencia de la guerra civil; el *Tribunal Especial de Divorcios*, establecido por Ley de 23 de octubre de 1939 para dar solución a las situaciones derivadas de la derogación de la Ley de Divorcios; *los Juzgados Especiales de Abastecimientos* creados por Ley de 30 de septiembre de 1940 de la Fiscalía de Tasas, para la aplicación de sanciones en dicha materia el *Juzgado especial para la restitución de Bienes Eclesiásticos* por Ley de 11 de julio de 1941, para la devolución de bienes de la Iglesia inscritos durante la Republica a nombres de terceras personas.

Este sistema de creación de Juzgados y Tribunales Especiales integrados por jueces de carrera, se utilizó ampliamente en estos primeros años de la posguerra en materia civil, en opinión de Mónica Lanero, con la que estamos de acuerdo, era una forma de compartimentación de la jurisdicción ordinaria, que posibilitaba una mayor y más directa intervención y control del Ministerio de Justicia⁶⁰¹⁸.

⁶⁰¹⁵ Hay constancia de su formal creación en la hoja militar del General Jesualdo de la Iglesia, pero han sido infructuosos los intentos de localizar expedientes de dichos Juzgados. Deber de estar entre los fondos documentales secretos no desclasificados por las autoridades del Ministerio del Ejército.

⁶⁰¹⁶ Diario Oficial del Ministerio del Ejército del 13 de febrero de 1958.

⁶⁰¹⁷ BOE de 13 de febrero de 1939.

⁶⁰¹⁸ Mónica LANERO TABOAS: *Una milicia de la Justicia...*, pp. 341 y 343.

Las facultades concedidas a las Salas de Gobierno de las Audiencias Territoriales y del Tribunal Supremo para el nombramiento de Jueces Especiales

En la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de septiembre de 1882, vigente durante toda la dictadura se establecía en sus artículos 303 y 304 la posibilidad de que las Salas de Gobierno de las Audiencias Territoriales podían nombrar un Juez Instructor Especial, si concurrían determinadas condiciones para motivar fundadamente el nombramiento del mismo y con la finalidad de realizar la más acertada investigación y la más segura comprobación de los hechos, que se concretaban: en delitos cuyas extraordinarias circunstancias, o las de lugar y tiempo de su ejecución, o de las personas que en ellos hubiesen intervenidos, como ofensores u ofendidos.

Igual facultad tendría la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para designar cuando proceda Juez Especial que conozca de los delitos cometidos en lugares pertenecientes a la jurisdicción de más de una Audiencia Territorial o en aquellos casos que por circunstancias del hecho lo estimaren conveniente la mencionada Sala, debiendo recaer el nombramiento en cualquier funcionario del servicio activo de la carrera judicial.

Analizando los libros de Actas de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para los periodos agosto de 1953 al de abril de 1956 y mayo del 1956 al de abril de 1961 existen múltiples designaciones de Jueces Especiales, para la instrucción de sumarios por determinados delitos y también causas civiles, de los que destacaremos algunos.

En 1953 para instrucción de delitos de emigración clandestina en todo el territorio nacional; en 1955, *Juez Especial para la instrucción de sumario por delito de robo acompañado de detención bajo rescate*; 1956 nombramiento de *Juez Especial para conocer la suspensión de Pagos del Banco de la Propiedad*; también es destacar en dicho año, tras los acontecimientos universitarios en la Universidad Complutense de Madrid, se designó inicialmente por la Audiencia Territorial de Madrid y luego ratificado por la Sala de Gobierno del TS un Juzgado Especial-que se denominó *Juzgado de Orden Publico*- para que tramitase los procedimientos derivados de los mismos y que constituye sin lugar a duda, un antecedente del Juzgado Especial que aquí estudiamos⁶⁰¹⁹; el 6 de abril de 1957, expedientes de designación de *Jueces Especiales para la tramitación de sumarios por falsificación de guías de importación y sobre introducción de moneda falsa en España*; 4 de mayo de 1956, *Juzgado Especial para la tramitación de juicios universales derivados de créditos concedidos por sucursal del Banco de España en Valencia*; julio 1956, *Juzgado Especial de Abastecimientos, en noviembre de 1956*.

En la de 8 de julio de 1958 se designó *Juez Especial para la instrucción de sumario por un delito contra la Seguridad Exterior del Estado*, a petición del fiscal, alegando haberse cometido un asesinato en la localidad de Illescas y la existencia de una organización clandestina que funcionaba en Madrid con la denominación de «*Comité de Gobernación Argelino*» destinado al parecer a fomentar la agitación argelina contra Francia y a proporcionar armas a los rebeldes.

La de 21 de mayo de 1960, se tramitó la solicitud de un *Juzgado Especial para instrucción de sumarios por irregularidades en el Instituto de Moneda Extranjera*. El 4 de agosto de 1960 la Sala de Vacaciones acordó desestimar la solicitud de un particular para que se designase un *Juez Especial con jurisdicción para todo el territorio nacional para conocer de los sumarios instruidos por supuestos delitos de usura* cometidos al realizar operaciones mercantiles de ventas a plazo.

⁶⁰¹⁹ Dado el anunciado inicial objeto de esta comunicación, nos limitamos a consignar su existencia, a la que dedicaremos una mayor extensión en el nuevo capítulo introductorio sobre los antecedentes de la Jurisdicción de Orden Público.

En la de 14 de abril de 1961 expediente relativo al *Juzgado Especial que entiende la quiebra de la Barcelona Traction S. A.*

Después de la creación por Ley de 2 de diciembre de 1963 de la Jurisdicción de Orden Público, con sus respectivos Juzgados (JOP) y Tribunal (TOP), en el año 1968 por decreto de 30 de marzo se creó un *Juzgado Especial también con competencia de ámbito nacional para tramitar los sumarios por hechos delictivos cometidos en centros de enseñanza*, siendo designado como titular del mismo al magistrado Manuel González Alegre y Bernardos⁶⁰²⁰, que ya lo era del Juzgado de Instrucción N.º 19 de los de Madrid, que estuvo funcionando hasta su supresión también por Decreto de 27 de julio de ese mismo año⁶⁰²¹.

En los últimos años del franquismo fueron celebres dos supuestos de nombramientos por la Sala de Gobierno del TS de *Jueces Especiales*, en el año 1969, el del Presidente de la Audiencia Territorial de Cáceres, Perpetuo Benedictino Sánchez Fuentes *para instruir el caso de la estafa de MATESA*⁶⁰²² y la designación de Don Luis de la Torre Arredondo, Magistrado que presidía la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid *para la instrucción del sumario por la muerte en atentado terrorista del Vicepresidente del Gobierno Carrero Blanco y otras personas*⁶⁰²³.

De una simple lectura de todos estos anteriores supuestos de designaciones o nombramientos de Jueces Especiales por la Sala de Gobierno del TS tanto para la instrucción de determinados sumarios o causas penales como en otros supuestos de materias civiles y mercantiles, se puede llegar a la conclusión, que en casi todos ellos, concurrían alguna de las circunstancias y condiciones legalmente exigidas en el antes referido art.º 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Característica común a todos estos procedimientos era que cuando la instrucción del sumario encomendado finalizaba, se ponía dicho extremo por parte del Juez Especial designado en conocimiento de la Sala de Gobierno que había procedido a su elección y con ello se concluía la facultad extraordinaria y excepcional en labores de instrucción de dicho Juez Especial, que volvía a desempeñar las funciones propias del Juzgado del que era titular.

Ello era consecuencia lógica y obligada de lo que disponía el artículo 305 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal *El nombramiento de jueces especiales de instrucción que se haga conforme a los artículos anteriores, será y habrá de entenderse solo para la instrucción del sumario con todas sus incidencias. Terminado este, se remitirá por el Juez especial al Tribunal a quién según las disposiciones vigentes corresponda el conocimiento de la causa, para que se prosiga y falle con arreglo a derecho.*

La literalidad de dicho precepto y la obligatoriedad que en él se explicitaba, con el empleo del modo imperativo con los términos «*será*», «*habrá*», «*solo para la instrucción del sumario*», nos lleva a concluir, que en el supuesto de la designación de Juez Especial Nacional de propaganda ilegal que pasamos a describir, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, se excedió en las facultades que legalmente le correspondían.

⁶⁰²⁰ Este Magistrado fue posteriormente en 1969 designado Magistrado del Tribunal Supremo- con ello se premiaba su función en un anterior puesto represivo- donde permaneció hasta 1991.

⁶⁰²¹ Los decretos de 30 de marzo y 27 de julio de 1968 se publicaron en el BOE de 01/04/ y 22/08/1968.

⁶⁰²² ABC 17/09/1969-Archivo Linz de la Transición. Fundación Juan March.

⁶⁰²³ <http://historiadela calle.blogspot.com/2015/07/la-cia-en-espana-parte-36-el-atentado-ii.html>.

El Juzgado de Instrucción Especial Nacional de Propaganda Ilegal

En la sesión del 25 de mayo de 1957, la Sala de Gobierno del TS a petición del Fiscal, acordaba tratar, según consta literalmente en el encabezamiento del Acta, como único punto del orden del día: *Nombramiento de un Juez Especial, para instruir sumario por propaganda ilegal*.

Pero esa facultad individualizada, ligada a los manifiestos clandestinos e impresos incautados en el domicilio de Antonio Menchaca Careaga, se trasmutó en el contenido del Acta y lo que era un simple designación de un Juez Especial para instruir un sumario determinado, se convirtió en la creación «ex novo» de un Juzgado de Instrucción Especial, con jurisdicción en todo el territorio nacional y no sólo para instruir el sumario del Sr. Menchaca, sino de cuantos con él tuviesen conexión, ya estuviesen instruyéndose en esos momentos o se procediese a incoar en lo sucesivo por nuevos hechos que se denunciasen, todo ello, según la Sala de acuerdo con lo establecido en el Art.304 de la LECRIM.

La simple enumeración y relación de las actuaciones, tramitación e instrucción de diferentes sumarios en distintos territorios del Estado Español durante el periodo correspondiente a finales de mayo de 1957 hasta diciembre de 1963 por este Juzgado de Instrucción Especial Nacional que se contienen en el Apéndice de esta comunicación pondrán en evidencia, algo de lo que venimos insistiendo, no fue una simple designación de un Juez Especial sino la creación de un nuevo órgano jurisdiccional para la represión de conductas políticas relacionadas con el delito de propaganda ilegal.

Facultad y competencia funcional que no estaba atribuida legalmente a la Sala de Gobierno del TS, conculcando está el mandato imperativo contenido en el antes mencionado artículo 305 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establecía la obligatoriedad de que una vez se hubiese instruido el sumario y todas las incidencias surgidas en el mismo, por el Juez Especial designado, este debería remitirlo al Tribunal que correspondiese el conocimiento y fallo con arreglo a derecho de la causa.

Se transcribe a continuación la certificación expedida por el Secretario de la Sala de Gobierno del TS, en el expediente instruido, en virtud de exposición del Ministerio Fiscal sobre nombramiento de Juez especial para la instrucción de sumarios por haberse ocupado por la Dirección General de Seguridad manifiestos clandestinos, cuando eran depositados en Correos, dirigidos a distintos destinatarios, al parecer con fines subversivos⁶⁰²⁴.

No estaría de más destacar que el Tribunal Supremo era el escalón máximo de la organización judicial y su función primordial y más importante, era decidir sobre los Recursos de Casación y Revisión contra las resoluciones judiciales-sentencias y autos- de los órganos inferiores.

Además tenía funciones gubernativas dentro del órgano colegiado que se ejercitaban a través y por conducto de la Sala de Gobierno, pero estas estaban tasadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870, entonces vigente y no regulaban la creación de nuevos órganos judiciales, función que dentro del propio ordenamiento jurídico del Nuevo Estado, correspondía al propio Jefe del Estado en virtud de las Leyes de Prerrogativas y a las Cortes Corporativas, como se demostró con el nombramiento en enero de 1958 por Decreto suscrito por Franco del Juez Especial Militar Coronel Eymar y por la posterior tramitación del proyecto y aprobación de ley de 2 de diciembre de 1963 de creación del JOP y del TOP en las Cortes.

⁶⁰²⁴ Así consta en la carátula del Expediente 81/57 de la Secretaria de Gobierno del Tribunal Supremo.

F. JAVIER TORNOS Y LAFFITTE, Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo.

C E R T I F I C O : Que entre los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno de este Tribunal en su sesión del día veinticinco de los corrientes se encuentra el siguiente:

"NOMBRAMIENTO DE JUEZ ESPECIAL PARA INSTRUIR SUMARIO POR PROPAGANDA CLANDESTINA.- Se dá cuenta de un escrito del Excmo. Sr. Fiscal que ha recibido de la Dirección General de Seguridad un atestado policial por haberse ocupado manifiestos clandestinos cuando eran impuestos en correos y otros documentos intervenidos en el domicilio de Antonio Menchaca Careaga que revelan su actividad propagandística con fines subversivos al parecer en connivencia con otras personas residentes en distintas provincias y en el extranjero y que la especial significación de estos hechos, en trascendencia y presunta extensión aconsejan la conveniencia de encomendar su investigación en toda su amplitud a un Juez Especial con jurisdicción en el territorio nacional y no solo para instruir el sumario que se incoará con el referido atestado, sino de cuantos con él tengan conexión, ya estén instruyéndose en la actualidad o proceda incoar en lo sucesivo por nuevos hechos que se denuncien. Previas unas explicaciones del caso que dá el Excmo. Señor Fiscal, la Sala, haciendo uso de la facultad que la concede el art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el cual está expresamente comprendido el caso de que se trata, acuerda, con carácter inmediatamente ejecutivo por su urgencia nombrar Juez Especial para la instrucción de los referidos sumarios en los propios términos solicitados por el Ministerio Fiscal al Juez de Instrucción nº 13 de esta Capital D. Jacinto Blanco Camarero, con jurisdicción en todo el Territorio Nacional, con facultades para designar el Secretario y personal auxiliar que precise y con revelación de las funciones ordinarias propias del Juzgado que desempeña, debiendo ponerse este acuerdo inmediatamente en conocimiento del Juez designado, del Presidente de la Audiencia Territorial de Madrid, del Excmo. Señor Ministro de Justicia para su aprobación a efectos de dietas y gastos a justificar y de la Inspección Cen-

El expediente 81/1957 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo

Dicho expediente, del que forma parte la anterior reproducción de la certificación del acuerdo inicial, designando como Juez especial Nacional de Propaganda Ilegal al magistrado Jacinto Blanco Camarero, conservado en el archivo del Tribunal Supremo, en cuya carátula inicial se dice: *Instruido en virtud de exposición del Ministerio Fiscal sobre nombramiento de Juez Especial para la instrucción de sumarios por haberse ocupado por la Dirección General de Seguridad manifiestos clandestinos cuando eran depositados en Correos, dirigidos a destinatarios, al parecer con fines subversivos...* es lo suficientemente ilustrativo para evidenciar, como era el tratamiento y funcionamiento interno que se le daba por parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo a un Juzgado Especial creado por ella misma, para reprimir conductas que entonces se consideraban ilegales aquí en España y que en otros países europeos constituían derechos y libertades de las personas.

En los inicios de dicho expediente de 280 folios numerados, lo primero a destacar, es la premura de la Sala de Gobierno del TS en atender y satisfacer el escrito que presentó en el Registro el Fiscal Ildefonso Alamillo el 25 de mayo de 1957, por el que solicitaba el nombramiento de un Juez Especial, con jurisdicción en todo el ámbito nacional, dada la especial significación, trascendencia y presunta extensión de los hechos descubiertos y por Decreto del Presidente del TS de esa misma fecha se convoca la Sala de Gobierno «con toda urgencia» para las doce y treinta de esa misma mañana a fin de dar cuenta del escrito del Ministerio Fiscal.

Tras llevarse a efecto esa reunión y nombramiento exprés del Juez Especial Nacional de Propaganda Ilegal y dado precisamente el ámbito competencial para todo el territorio del Estado, se echa en falta en todo ese expediente, la inexistencia de dato alguno que permita deducir, la forma y manera, que se utilizó por la Sala de Gobierno, la Fiscalía o el mismo Ministerio de Justicia para comunicar a todos los órganos judiciales españoles unipersonales-jueces de instrucción- y colegiados-Salas de las respectivas Audiencias Provinciales y fiscales, que se había creado ese Juzgado Especial, con domicilio en el del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 13 de los de Madrid⁶⁰²⁵.

Tan solo el Presidente de la Audiencia Provincial de San Sebastián formuló por escrito de 13 de mayo de 1959 dirigido al Presidente del Tribunal Supremo, *rogando le comunicasen si había sido designado Juez Especial para la instrucción de los sumarios por Asociaciones Ilícitas y propaganda ilegal, en todo el territorio nacional, como igualmente si existía Sala Especial para el conocimiento de dichas Salas en periodo plenario*. A lo que se contestó el 19 de mayo, haciéndole saber el acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno el 25 de mayo de 1957 con la designación del Juez Especial Jacinto Blanco Camarero para la tramitación de dichas causas y de que no existía Sala Especial para el periodo plenario.

De dicha respuesta y de los datos que se obtienen recogidos hasta ahora de los diversos procedimientos tramitados por ese Juzgado Especial relacionados en nuestro Apéndice, se ha de llegar a la conclusión, que una vez finalizado el sumario, este se remitía de nuevo, al Juzgado de Instrucción del lugar donde habían ocurrido los presuntos hechos delictivos, para que a su vez este diese traslado a la respectiva y correspondiente Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial para

⁶⁰²⁵ Ni en el BOE, ni en los Boletines Informativos quincenales del M.º de Justicia, ni en Circulares periódicas que se remitían a la cadena jerárquica de los fiscales de toda España hay constancia alguna de esa comunicación, acerca de la creación y funcionamiento del Juzgado Especial por lo que no tendría nada de extrañar que la misma se hubiese realizado a través de Orden Reservada, que como su nombre indican no se hacían públicas

que se señalase fecha para celebración del juicio oral y dictase después la correspondiente Sentencia.

Esto además de la disfunción jurisdiccional que suponía originaba retrasos frecuentes dado la movilidad del sumario incoado desde Madrid al Juzgado que había iniciado los trámites y posterior remisión a la Audiencia.

Frente a esa omisión que dificultará enormemente la búsqueda en los archivos para elaborar un catálogo y relación de causas y procedimientos tramitados por ese Juzgado Especial, resulta sorprendente la profusión y de referencias que existen en el expediente al tema de las dietas y gratificaciones del magistrado, secretario, fiscal y resto del personal del Juzgado Especial, por entender las altas instancias de la cúpula judicial y del ministerio fiscal, la actividad excepcional y extraordinaria que habían de llevar a cabo dicho la plantilla completa de dicho Juzgado Especial.

Cuestión esta que se planteaba anualmente con nueva propuesta de actualización de las cuantías, formulada por el Juez Jacinto Blanco Camarero, cuyo reconocimiento y abono dependía de la Subsecretaria del Ministerio de Justicia Ministerio de Justicia, previa dictamen del Ministerio Fiscal y del Magistrado Ponente para posterior aprobación por la Sala de Gobierno del TS, de ahí que gran parte del expediente estuviese relacionado con las copias de los escritos referidos a ese tema.

Las gratificaciones mensuales que percibieron el Juez Especial, el Fiscal y el Secretario desde enero de 1958 a diciembre de 1963 fueron de 30.000 pesetas para los dos primeros y de 25.000 para el tercero, para el Oficial 1.º 12.000, Auxiliar 9.000, Agente Judicial y chofer del parque móvil 6.000.

En vista de estas sabrosas gratificaciones de todo el personal del Juzgado Especial-que lógicamente se percibían además de los respectivos sueldos oficiales- los tres Magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, que eran los que celebraban el juicio y dictaban la sentencia en los sumarios instruidos por el Juzgado Especial Nacional de Propaganda Ilegal, se dirigieron por escrito el 27 de octubre de 1959 al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del TS solicitando la percepción de gratificaciones para ellos y para el resto del personal Auxiliar de la Sala, a lo que el Fiscal del Supremo se opuso de plano, alegando *no existir en absoluto la menor paridad ni los mismos fundamentos para que se les concediese esta gratificación...ya que la actuación del Juzgado Especial es mas movida e intensa de la que pueda tener la Sección encargada de conocer los asuntos ya terminados*. Criterio denegatorio que también asumió el magistrado ponente por lo que la petición de la Sala de la Sección 3.ª de la AP de Madrid fue desestimada por la Sala de Gobierno del TS el 13 de noviembre de 1959.

También lo fue la propuesta de actualización para el año 1962 realizada a solicitud del Juez Especial de elevar la gratificación a 50.000 pesetas para él y para el fiscal del Juzgado y de 40.000 para el secretario, por considerarlas excesivas.

El cierre de dicho expediente también resulta ilustrativo ya que da fe de cuáles fueron las últimas actuaciones de dicho Juzgado Especial Nacional de Propaganda Ilegal, un escrito, también del mismo Fiscal General Idelfonso Alamillo de fecha 15 de noviembre de 1963, dirigido a la Sala de Gobierno del TS, dando cuenta de que *el trabajo realizado por ese Juzgado es abundante y delicado y que se veía aumentado, por el sumario que comenzó el Juzgado N.º 18 de Madrid con el N.º 512/1963, en virtud de querrela del Ministerio Fiscal, con motivo de haberse publicado en periódicos extranjeros un escrito dirigido por 102 españoles al Excmo. Sr. Ministro de Información, hecho-que añadía- puede estar sancionado en los artículos 251 a 253 del Código Penal*.

Por lo que solicitaba *dada la necesidad de que se actuase con toda la rapidez posible con las máximas garantías de acierto*, se relevase al ya Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

Jacinto Blanco Camarero⁶⁰²⁶ del despacho ordinario de ese órgano, para poder dedicarse de lleno a la finalización del sumario contra los 102 intelectuales.

Tras el Informe favorable del Ponente la Sala de Gobierno del TS accedió a lo solicitado en su reunión del 5 de diciembre de 1963, poniéndolo en conocimiento del Ministerio de Justicia y del propio Magistrado afectado, Jacinto Blanco Camarero quién sorprendentemente, presentó escrito el 23 de diciembre, *que no era necesario llevar a cabo relevo del despacho ordinario ya que el sumario N.º 512 de 1963 del Juzgado N.º 18 estaba pendiente de diligencias de mero trámite y no precisa dedicación exclusiva al mismo*.

Además de la flagrante contradicción entre las opiniones vertidas en el escrito del Fiscal del Supremo y del Magistrado Blanco Camarero, concurría otra circunstancia de especial consideración, en esas fechas ya estaba publicada la Ley de 2 diciembre de 1963, creando el Juzgado y Tribunal de Orden Público, por la que, de acuerdo con su art.º 3, a) y Disposición Transitoria 2.ª -los supuestos hechos delictivos cometidos con anterioridad pasaban a ser competencia de los nuevos órganos.

Para terminar este apartado, incluimos una descripción del Juez Especial, del profesor y ex embajador Raúl Morodo, en el primer tomo de memorias:

Pasadas las 72 horas reglamentarias en las celdas de los sótanos de la DGS me trasladaron al Palacio de las Salesas, en donde el Juez Instructor llamado Blanco Camarero me tomó declaración (era mayo de 1957). Me preguntó por nombres que yo desconocía y su idea preconcebida consistía en poder articular mis presuntas actividades delictivas, dentro de lo que entonces se tipificaba como «propaganda ilegal» y «atentar contra la Seguridad del Estado» y así me procesó por estos delitos. Por supuesto que negué casi todo... deduje que era un feroz anti europeísta, muy castizo, reaccionario y prepotente. Dictó mi procesamiento sin fianza y me envió a la cárcel. De esta manera, con buen tiempo primaveral entré por primera vez en la cárcel madrileña de Carabanchel⁶⁰²⁷.

El Secretario del Juzgado Especial Nacional de Propaganda Ilegal Julián Zubimendi Marce, que ya lo era del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción N.º 13 de los de Madrid aparecía citado como juez-instructor de la Causa General el 25 de abril de 1938 en la ciudad de Castellón y con una nota al momento de su conclusión el 11 de marzo de 1939 resumen final del Informe, destacando su carácter provisional ya que faltaban los referentes a 34 pueblos «no liberados»⁶⁰²⁸.

Accedió a la carrera judicial, desde su doble puesto de fedatario de los Juzgados de Instrucción N.º 13 y del Juzgado Especial Nacional de propaganda Ilegal pasó a ser Magistrado de Trabajo de Teruel, donde se jubiló el 1 de julio de 1976⁶⁰²⁹ y falleció el 13 de diciembre de 1999.

El primer fiscal asignado a este Juzgado Especial fue Antonio González Cuellar quién permaneció allí hasta finales de 1958, fue después, en enero del año 1964 hasta abril de 1967 primer fiscal del Juzgado de Orden Público.

⁶⁰²⁶ El Magistrado Jacinto Blanco Camarero después de estar en la Audiencia Provincial y Territorial de Madrid desde el año 1962 fue designado Magistrado de la Sala Segunda Tribunal Supremo el 1 de noviembre de 1964 a propuesta del Ministerio de Justicia, donde permaneció hasta su fallecimiento ocurrido en Cáceres el 19 de enero de 1967.

⁶⁰²⁷ Raúl MORODO: *Atando Cabos. Memorias de un conspirador moderado*, Madrid, Taurus, 2001, p. 185.

⁶⁰²⁸ Carmen MAGAN MERCHAN, Isabel LOPEZ ESCASO, Juan Magín MARTÍN ARNESTO: «Causa general: La represión de «los más perversos ideales»». Comunicación a las Cuartas Jornadas de Archivo y Memoria, Madrid 19 y 20 de febrero del 2009, p. 10.

⁶⁰²⁹ Orden de 1 de julio de 1876, BOE de 16 de julio de 1976.

De la Jurisdicción de Guerra Permanente a la Jurisdicción Penal Ordinaria, en tránsito a la Jurisdicción de Orden Público

Para una debida valoración de lo que significaron en el panorama general de la represión de la oposición política por parte de la dictadura franquista la creación del Juzgado Especial de Propaganda Ilegal aquí analizados- mayo de 1957-diciembre de 1963, resultaría indispensable analizar previamente el papel y función de la Jurisdicción de Guerra en dicho periodo, a partir de finales de la década de los cuarenta labor que desbordaría el marco y límites de esta comunicación, por lo que, nos limitamos a consignar algunos extremos, que entendemos de interés.

Como es bien sabido el ejército español, además de sus responsabilidades gubernamentales, tuvo un importante papel en el control social, ejercido desde los gobiernos militares, convirtiéndose en el gran vigilante de la victoria, también fue el principal ejecutor de la política represiva a través de los consejos de guerra, en los que apenas se respetaban las mínimas garantías procesales⁶⁰³⁰.

Hasta la creación de la Jurisdicción de Orden Publico por Ley de 2 de diciembre de 1963, siguió funcionando casi en exclusividad la jurisdicción militar- o jurisdicción de guerra- en la represión de la oposición política fundamentalmente contra algunos de los focos maquis que seguían operando en diferentes lugares montañosos y personas que le prestaron ayuda y cobertura, también contra los sucesivos diversos intentos de reorganización de los partidos políticos-comunistas y socialista- y agrupaciones sindicales tradicionales como la CNT y la UGT.

En una reciente publicación se consignan, varias ejecuciones llevadas a cabo durante los años 1950 a 1954 como consecuencias de consejos de guerra celebrados en Madrid, instruidos por Juzgados Militares de delitos de Comunismo y Espionaje⁶⁰³¹. Uno de esos jueces instructores titulares era el coronel de infantería Enrique Eymar Fernández, que venía ejerciendo desde 1943 y que además fue designado por Decreto de Franco de 24 de enero de 1958, *como Juez Especial Militar, con jurisdicción en todo el territorio nacional para la tramitación de los procedimientos judiciales derivados de las actuaciones extremistas recientemente descubierta, dependiente de la autoridad judicial de la Primera Región Militar*⁶⁰³².

Se transcribe a continuación una tabla con los porcentajes de civiles sobre el total de personas juzgadas por los Tribunales Militares en el periodo 1955 a 1966, cuya fuente es el Alto Estado Mayor, Anuario Militar (para los años considerados) que fue publicado por el sociólogo José Juan Toharia⁶⁰³³.

De los datos porcentuales contenidos en dicha tabla se deduce que hasta el año 1960 el total de los civiles condenados se aproximaban casi a la mitad, mientras que es perceptible la bajada respecto al total de los condenados.

Lamentablemente hasta el momento no hemos podido acceder a las fuentes de esas estadísticas del Alto Estado Mayor del Ejército, para completar estos datos con los primeros diez y seis años de funcionamiento de la Jurisdicción de Guerra (1939-1955) y los últimos seis (1966-1975) del franquismo, pese a los intentos realizados.

⁶⁰³⁰ Francisco ALIA MIRANDA: *Historia del Ejército Español y de su intervención Política*. Libros de la Catarata. *Del Desastre del 98 a la transición*. Madrid, 2018, p. 144.

⁶⁰³¹ Manuel GARCIA MUÑOZ: *Detrás de las Rejas. Ejecuciones en Carabanchel (1944-1955)*, Sevilla, Espuela de Plata, 2018, pp. 352-353.

⁶⁰³² BOE del 12 de febrero de 1958.

⁶⁰³³ *El Juez español: Un análisis sociológico*, Madrid, Tecnos, 1975, p. 174.

Lo que si resulta evidente, a la vista de los resultados de los diversos procedimientos instruidos por el Juzgado Especial Nacional de Propaganda Ilegal es que a partir de la creación del Juzgado Especial militar del Coronel Eymar en enero de 1958, son bastantes frecuentes que determinadas actuaciones por hechos presuntamente delictivos que inicialmente le eran atribuidas a ese Juzgado, fueran « traspasados» al nuevo órgano jurisdiccional, con lo que se dejaba precisamente al Juez Militar la facultad de decidir qué jurisdicción era la que tenía competencia para enjuiciar esos hechos.

TABLA 8.4: PORCENTAJE DE CIVILES SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS JUZGADAS POR L
TRIBUNALES MILITARES EN EL PERÍODO 1955-1966

Año	Total de condenados	Civiles condenados	% de civiles sobre el total
1955	2.046	902	38
1956	2.143	902	42
1957	1.972	723	37
1958	1.735	727	42
1959	1.684	529	30
1960	1.674	605	36
1961	1.513	414	27
1962	1.208	376	31
1963	1.358	312	23
1964	1.375	372	27
1965	1.331	329	24
1966	1.447	332	23

Fuente: Alto Estado Mayor, *Anuario Estadístico Militar* (para los años cc
derados).

La aprobación de la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1959

A diferencia de lo ocurrido tras los acontecimientos de febrero de 1956 en la universidad madrileña, que el gobierno hubo de utilizar la Ley de Orden Publico aprobada por la Republica, fue la posterior aprobación de una nueva Ley de Orden Publico en 1959, factor a tener en consideración para una valoración global de la institución represiva del Juzgado Especial y su incidencia en la persecución de la oposición política,

En el discurso pronunciado por el Ministro de la Gobernación Camilo Alonso Vega, en la sesión plenaria de Las Cortes de 28 de junio de 1959, en defensa del proyecto de Ley la calificó como:

La Carta magna de la convivencia social, porque venía a confirmar el aforismo «Salus populi suprema lex», claro está, que previamente dejó dicho: Nada tengo, en nombre del Gobierno, que oponer a la redacción que el dictamen dio al apartado a) del artículo 2.º, considerando incursos en la Ley a los atenten contra la unidad espiritual, nacional, política y social de España...queda sobreentendido que tal unidad es la que resulta del, amplio marco que se desenvuelve la vida política española, con arreglo a los principios fundamentalesy que sólo puede considerarse atentado contra ella, el uso de modos o medios ilegales e ilícitos para atacarla, es decir al margen de las garantías concedidas en el Fuero de los Españoles⁶⁰³⁴.

⁶⁰³⁴ Boletín Oficial de las Cortes Españolas N.º 638.

Al final de su discurso mantuvo...:

Y en fin si Tribunales de Excepción, según Leyes Especiales, como la de 1 de marzo de 1940, 2 de marzo de 1943 y 18 de abril de 1947, vienen conociendo de delitos de grave alcance o significación contra el orden público y la Seguridad del Estado, se declara el *status quo*; pero se faculta especialmente al Gobierno para que revise y unifiquela competencia atribuida en tal materia a diversas jurisdicciones⁶⁰³⁵.

Lo anterior tenía como base lo dispuesto, en la segunda de las Disposiciones Transitorias de la Ley de Orden Público, por las que se establecía *Seguirá entendiendo la Jurisdicción Militar de los delitos que, afectando al orden público, les estén atribuidas con arreglo a lo establecido en Leyes especiales, sin perjuicio de las inhibiciones que se acordaren a favor de la jurisdicción ordinaria y en tanto que el Gobierno revise y unifiquelas nomas de competencia relativas concretamente a dichos delitos, autorizándosele especialmente para ello.*

Decreto sobre Rebelión Militar, Bandidaje y Terrorismo, 21 de septiembre de 1960⁶⁰³⁶

Tercer y última consideración para evidenciar que hasta bien entrada la década de los sesenta la dictadura siguió dándole preeminencia a la jurisdicción militar, las incidencias ocurridas en la tramitación y aprobación de este Decreto Ley⁶⁰³⁷.

Tal y como se explicitaba en la antes citada Disposición Transitoria de la nueva Ley de Orden Público, dicha revisión y unificación se llevó a efectos mediante este Decreto, en cuya virtud serían considerados reos del delito de rebelión militar, de acuerdo el artículo 286 del Código de Justicia Militar y penado conforme a lo dispuesto en ese código, enumerándose una larga lista de supuestos: como eran, *la difusión de noticias falsas o tendenciosas, con el fin de causar trastornos de orden público interior, conflictos internacionales o desprestigio del estado, sus Instituciones, Gobierno, Ejército o Autoridades; los que por cualquier medio se unan, conspiren o tomen parte en reuniones, conferencias o manifestaciones con los mismos fines expresados anteriormente. Podrán tener tal carácter plantas, huelgas, sabotajes y demás análogos cuando persigan un fin político o causen graves trastornos al orden publico...*

A modo de conclusiones provisionales

A mediados de los años cincuenta tras una serie de acontecimientos- como fueron los tratados con la Santa Sede y los Acuerdos con los EE. UU. por la cesión de las bases militares en territorio español y la paulatina incorporación a organismos internacionales y muy especialmente los inicios de la guerra fría con un anticomunismo beligerante- la dictadura franquista parecía afianzarse institucionalmente, sin verse obligada a realizar ningún cambio estructural.

⁶⁰³⁵ Los textos transcritos del discurso del Ministro Camilo Alonso Vega, en Ley de Orden Público. Edición Oficial. Ministerio de la Gobernación. Secretaría general Técnica. Boletín Oficial del Estado. Madrid 1974.

⁶⁰³⁶ Presidencia del Gobierno, Decreto 1794/1960, de 21 de septiembre, revisando y unificando la Ley de dos de marzo de mil novecientos cuarenta y tres y el decreto-Ley de dieciocho de abril de mil novecientos cuarenta y siete. BOE de 26 de septiembre de 1960.

⁶⁰³⁷ Juan José DEL AGUILA: *El TOP...*, pp. 388-393.

Pero los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en Madrid con la aparición de un nuevo movimiento de oposición política al «Régimen» en el que se integraban jóvenes hijos de los vencedores y de los vencidos y el activismo de determinados sectores ligados a movimientos católicos, socialdemócratas y liberales monárquicos partidarios del restablecimiento de la monarquía en la persona de Don Juan, padre de Juan Carlos, hizo que para hacer frente a los mismos, no se considerase ni oportuno ni adecuado, la utilización de los mecanismos represivos que hasta ese momento habían sido utilizados de la Jurisdicción Especial de Masonería y Comunismo y de otros Juzgados Militares Especiales.

A la vista de las experiencias de la propia guerra civil y de la posguerra, además de actuar diversas Jurisdicciones Especiales, concurrían la creación de múltiples Jueces Especiales en diferentes ámbitos jurisdiccionales pero que solo estaban facultados legalmente para la tramitación de un procedimiento o sumario determinado, una vez finalizado y puesto a disposición de la Sala que habría de juzgarlo, ese Juez Especial dejaba de serlo.

La designación realizada por la Sala de Gobierno del TS en mayo del 1957 del juez Jacinto Blanco Camarero, la puesta en marcha y funcionamiento del Juzgado Especial Nacional de Propaganda Ilegal, de ámbito nacional y competencias específica en una figura delictiva contra la Seguridad Interior del Estado, como eran las propagandas ilegales, resultó ser totalmente irregular, ya que creó «ex novo» un Juzgado Especial, facultad legal que no tenía dicho órgano gubernativo judicial.

La medida, además de las disfunciones orgánicas y funcionales originadas con la creación de este nuevo órgano judicial-instruir el sumario en Madrid, para luego devolverlo al Juzgado de Instrucción donde ocurrieron los hechos y este ponerlo a disposición de la Sala de la Audiencia Provincial correspondiente para celebrar juicio y dictar Sentencia- tuvo un coste aún mayor, que fue, la de implicar a toda la organización jurisdiccional ordinaria, magistrados, jueces, fiscales, y secretarios en tareas directas de represión política, misión y función encomendada tras la guerra civil a las tres Jurisdicciones Especiales: la Militar, la de Responsabilidades Políticas y la de Masonería y Comunismo.

La designación como Juez Especial Militar del Coronel Eymar en enero de 1958, la aprobación de una nueva Ley de Orden Público en julio de 1959 y la promulgación de Decreto Ley de Bandidaje y Terrorismo en septiembre de 1960 significaron que la Dictadura Franquista seguía manteniendo a principios de la década de los sesenta una doble estructura represora para los denominados delitos políticos: la expeditiva militar de los consejos de guerra y la de un Juzgado Especial Nacional de Propaganda Ilegal, con sede en Madrid e insertado «artificialmente» en la Jurisdicción Ordinaria Penal que actuó desde mayo de 1957 a diciembre de 1963, por lo que constituyó un eslabón más en las instituciones represivas del franquismo y a su vez fue el antecedente inmediato anterior, de lo que se puso en marcha en diciembre de 1963 de la Jurisdicción Especial de Orden Público.

APÉNDICE I

Referencias a determinados procedimientos que se instruyeron por el Juzgado Especial Nacional de Propaganda Ilegal desde mayo de 1957 a diciembre de 1963.

* Sumario N.º 1/1957, motivado por manifiestos clandestinos cuando eran impuestos en Correos y otros documentos intervenidos en el domicilio de Antonio Menchaca Careaga. Se declaró concluso el 9 de agosto de dicho año, pese a ello, el juicio se demoró, al acumularse la Causa N.º 25 del Juzgado N.º 25 de Madrid seguida contra Dionisio Ridruejo, Fermín Solana, Enrique Tierno, Germán Argumosa, Raúl

Morodo, y Fernando Baeza, hasta el 16 de marzo de 1961, que dictó Sentencia la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid con posterior sentencia del TS, Sala Segunda de 26 de marzo de 1963.

* Sumarios N.º 6/1958 y 444/1958, contra Javier Pradera y otros cuarenta y tres estudiantes y obreros, acusados inicialmente de los delitos de intentar reconstruir el Partido Comunista de España, haber participado algunos de los detenidos en el VI festival de la Juventud celebrado en Moscú en el verano del 1957 y tratar de organizar en España la Jornada de Reconciliación Nacional.

Inicialmente lo instruyó el coronel Enrique Eymar Fernández, que se inhibió a favor del Juzgado Especial Nacional de Propaganda Ilegal.

Sería este el segundo procesamiento y prisión de Javier Pradera, el primero lo fue a raíz de los acontecimientos universitarios de febrero de 1956.

La tercera, lo fue igualmente por el titular del Juzgado Especial Nacional de Propaganda Ilegal en el Sumario 19/1963, quién dictó Auto de Procesamiento y prisión el 4 de octubre de 1963, que fue reformado en el posterior de 14 de noviembre de 1963, decretando la prisión atenuada en su domicilio de Madrid. Por Auto de 27 de abril de 1964 del Tribunal de Orden Público y a petición del Ministerio Fiscal en la Causa N.º 22/1964, se solicitaba la apertura de juicio oral para todos los procesados, con excepción de Francisco Javier Pradera, para el que solicitaba el sobreseimiento, lo que se acordó.

* Sumario N.º 8/1958, correspondiente al Rollo 10.920, sumario 446 del mismo año del Juzgado de Instrucción de Oviedo con Auto de procesamiento de 24 de noviembre de 1958, contra Antonio Amat Maíz, Luis Martín Santos, Antonio Villar Masso y otros seis encartados, que se fueron ampliando con sucesivas detenciones de socialistas de otras ciudades hasta llegar a cincuenta, en el escrito de calificación provisional del M.º Fiscal del 19 septiembre de 1960, con penas solicitadas de seis años de prisión menor a los once que tenían antecedentes, de cuatro años a otros veinte y cinco procesados y de dos años a los catorce restantes. El juicio oral tras varias suspensiones tuvo lugar los días 31 de enero y 1 de febrero de 1964, ante la Sección Cuarta de la Audiencia provincial de Madrid

* Sumario N.º 1/1960 correspondiente al N.º 132 del de Instrucción de Bilbao, Rollo N.º 869 por el delito de propaganda ilegal, seguidos contra Ignacio Allica Zalacain y otros 22 procesados vascos con Sentencia condenatoria del 16 de noviembre de 1960 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao.

* Sumario N.º 4/1961 por propaganda ilegal-tipo monárquico-contra Ignacio Romero de Solís.

* Sumario N.º 6/1961, que a efectos de registro es el N.º 126/1961 del Juzgado de Instrucción de Mérida (Badajoz), incoado el 22 de septiembre contra Francisco Márquez Requejo, 16 años, feriante y domicilio en Talavera la Real por Propaganda Ilegal-tipo marxista-oír Radio Independiente Radio Pirenaica, en Auto de 2 de diciembre de 1961.

* Sumario 273/1961 del Juzgado de Instrucción N.º 5 de Bilbao, seguido por el delito de propaganda ilegal contra Gregorio Illoro Ruiz (a.Goyo) y otros siete, Sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Bilbao el 7 de octubre de 1961.

* Sumario N.º 18/1962 y que a efectos de registro es el N.º 196/1962 del Juzgado de Instrucción de Montoro (Córdoba) por hechos de actividades extremistas, incoado el 22 de diciembre seguido por el delito de propaganda ilegal-tipo comunista, contra Francisco Cabezón Melero y otros doce procesados.

* Sumario 94/62, con sentencia de 30 de julio de 1962 dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid en el sumario instruido por el Juzgado de Instrucción N.º 13 seguido por propaganda ilegal contra Luis Gómez Llorente, Miguel Ángel Martínez y Miguel Boyer, los dos primeros condenados a siete meses de prisión y 7.000 de multa, fue absuelto Boyer.

* Sumarios N.º 15 y N.º 23/63, que se corresponde con el sumario 329/1963 del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oviedo, donde fueron juzgados y absueltos por un delito de propaganda ilegal los mineros socialistas Pedro León Álvarez, Leonardo Velasco, José María Fernández, Herminio Álvarez Iglesias y Gerardo Álvarez García, en virtud de la inhibición de la Jurisdicción Militar contra treinta y nueve mineros asturianos por el supuesto delito de propaganda ilegal, en virtud de la inhibición de la Jurisdicción Militar a favor de la ordinaria.

* Sentencia de 23 de diciembre de 1963 de la Audiencia Provincial de Madrid en causa procedente del Juzgado de Instrucción N.º 13 de la capital por el delito de propaganda ilegal contra Juan Manuel Kindelan Gómez Bonilla, quién resultó absuelto, por hechos ocurridos en el año 1958 y relacionados con la creación de la ASU.